

Los aportes de México a la solución política de la guerra salvadoreña

David Escobar Galindo

Antecedentes

Ninguna guerra, del tipo y de la magnitud que sea, surge por impulso espontáneo. Todas, en cualquier tiempo y lugar, requieren esfuerzos constructivos según sea la naturaleza de las mismas. Esto parece una paradoja, pero es lo que, tras un análisis cuidadoso, enseña la experiencia histórica. Esa afirmación es aún más patente cuando se trata de conflictos internos que desembocan en enfrentamientos bélicos, como el caso de El Salvador, que entre los años treinta y noventa del pasado siglo vivió una preguerra, una guerra y el inicio de una posguerra. Cualquier enfoque parcial de tan complejo y dilatado fenómeno es un principio de distorsión que a la postre puede llevar a conclusiones erróneas y confusas sobre lo que pasó, lo que pasa y lo que se podría esperar que pasará.

La construcción histórica de la guerra salvadoreña se ha dado en el espacio de una negación también histórica: la falta endémica de un articulado esfuerzo democratizador que hubiera servido justamente para construir el proyecto contrario al de la guerra: el de la convivencia pacífica. Durante el siglo XIX se impulsieron los caudillismos militares y civiles, y en gran parte del siglo XX predominó una especie de alianza monopolizadora

del poder, al frente de la cual estaban tres cúpulas: la económica, la militar y la eclesiástica. En la década de los sesenta empezó a quebrantarse tal alianza, que entró en fase terminal en la siguiente. La llegada al arzobispado de San Salvador del monseñor Óscar Arnulfo Romero en 1977 y el golpe de Estado de 1979 sellaron el fin de una época.

A esas alturas, ya estaban definidos los que serían contendientes militares en el conflicto: las fuerzas armadas, por el bando del poder tradicional, y los grupos guerrilleros, por el bando revolucionario. Esta caracterización no era arbitraria, por el contrario, correspondía a la naturaleza de una conflictividad que había llegado a su punto máximo. No se trataba de una contienda difusa o localizable en zonas circunscritas del país, sino de un verdadero enfrentamiento bélico; la culminación de un largo y complejo proceso de división nacional que durante años ocupó los espacios del quehacer nacional en todos los órdenes. Las vísperas llegaban a su fin y lo que quedaba era la batalla por los desenlaces, los que, a la luz de ejemplos como el de Nicaragua, se visualizaban muy próximos.

Hacia la mitad del año de 1980, la guerra, que había comenzado a vislumbrarse exactamente una década antes, llegó al terreno de la confrontación militar directa. En octubre de ese año apareció formalmente el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que hasta en el nombre quería parecerse a la versión nicaragüense, ya entonces en el poder. Todo estaba listo para el impulso decisivo; el 10 de enero de 1981, el FMLN lanzó lo que al principio se conoció como la “ofensiva final”, que, al no cuajar como tal, cambió de título para ser llamada “ofensiva general”. Tendríamos guerra para bastante tiempo.

Y así fue, hasta que las mismas condiciones nacionales e internacionales cerraron las puertas a una posible “solución” militar, lo cual habría significado reproducir vicios y distorsio-

nes del pasado por tiempo indefinido, y abrieron posibilidades ciertas y sostenibles a la verdadera solución, que sería resultado de un entendimiento político entre los dos contendientes bélicos, representantes de los poderes tradicional y revolucionario. Eso significó que ninguno de los dos proyectos enfrentados con las armas se instalaría como realidad excluyente, y que luego de una solución sin vencedores ni vencidos se normalizaría el escenario para la competitividad democrática. Eso fue lo que pasó, como resultado emblemático y ejemplar del triunfo de la razón sobre la fuerza.

La internacionalización del conflicto

Como lo reconoció el presidente Alfredo Cristiani en el acto solemne de suscripción del Acuerdo de Paz, que tuvo lugar en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México el 16 de enero de 1992, la guerra salvadoreña fue un conflicto fundamentalmente interno, con sus raíces y sus desarrollos en el suelo histórico de su realidad. Este reconocimiento colocaría, por el lado de las fuerzas del poder tradicional, las cosas en su verdadero sitio. Desde luego que a partir del mismo reconocimiento, hay que hacer una serie de consideraciones analíticas para ubicar el fenómeno en su verdadera dimensión, porque en este tipo de valoraciones se presenta siempre la tendencia a la simplificación interesada, que es parte de la manipulación tan frecuente de los hechos colectivos y de sus significaciones en el tiempo.

El conflicto salvadoreño empezó a tomar forma a comienzos de la década de los setenta del siglo pasado, cuando se produjo la escisión institucional del Partido Comunista Salvadoreño y nació la primera organización guerrillera con el propósito de impulsar lo que en aquellos días se llamaba *la guerra popular prolongada*. Una guerra que, en cuanto a la toma

del poder del Estado, se avizoraba, por el contrario, como un proyecto armado fulminante. Ésa era la lógica imperante en esos tiempos caracterizados como “prerrevolucionarios” prácticamente en el mundo entero. La Revolución, con mayúscula, era la deidad suprema para una infinidad de gente de aquellas épocas; una deidad impaciente y aureolada de heroísmo incontestable.

La victoria sandinista de 1979 dio al conflicto salvadoreño, entonces aún no desplegado en el terreno, pero cada día con impulsos más intensos, una especie de actualidad “urgente”. Un lema circulaba sin tapujos por esos días: “Si Nicaragua venció, El Salvador vencerá”. Así llegó 1980, con la puesta en escena de la guerra interna, y 1981, con la gran ofensiva inicial, la cual, como dijimos antes, surgió con el propósito explícito de ser una ofensiva final. No lo fue, pero sí demostró que el FMLN no era una expresión de rebeldía casual. Ello despertó desde luego reacciones encontradas, porque en la atmósfera de la Guerra Fría no había espacio para posiciones intermedias. Era un argumento dibujado dramáticamente en blanco y negro.

Así las cosas, el 28 de agosto de 1981 se produjo un acontecimiento político que puso a El Salvador en la primera línea de la atención internacional: la Declaración Franco-Mexicana. Los ministros de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, y Francia, Claude Cheysson, suscribieron la Declaración, que reconocía el carácter representativo de la alianza entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el Frente Democrático Revolucionario; el primero, un frente en armas y, el segundo, uno político. Tal reconocimiento, como era de esperarse, levantó en su momento muy encendidas reacciones de adhesión y de rechazo, y puso el conflicto bélico salvadoreño en una dimensión que sólo sería posible identificar serenamente con el paso del tiempo: aquella no era una guerra importada, sino un fenómeno político nacional.

El hecho de que México y Francia se animaran a dar aquel paso definitivo y tan arriesgado en su momento, fue efectivamente anunciador de lo que vendría una década después: el fin negociado de la guerra interna, que se logró por la voluntad concertada de las dos partes en contienda, con el apoyo decisivo de la comunidad internacional. México puso sin duda la fuerza inspiradora en aquella declaración, que es hoy un hito histórico incuestionable. Lo saludablemente paradójico fue que aquel movimiento de carácter internacional venía a reconfirmar, de cara al mundo, la naturaleza nacional del conflicto salvadoreño. Un acontecimiento que sigue mereciendo análisis aleccionadores.

El papel vital de México en la fase definitiva del conflicto

La guerra salvadoreña tuvo su punto de inflexión decisiva hacia la solución política en 1989, es decir, nueve años después de que se desatara. Esto no sucedió, por supuesto, de improviso, ni por incidencia determinante del azar. La suerte de la guerra salvadoreña se había echado desde hacía mucho, prácticamente desde los estadios más remotos de la preguerra. La guerra de El Salvador no fue una guerra ideológica, como la propaganda de ambos bandos quería hacer creer, sino una guerra política, porque el detonante final de la misma había sido la inoperancia histórica del sistema político, lastrado por el ejercicio distorsionado del poder. La paz resultante no podía ser, entonces, una reproducción de ese ejercicio distorsionado, independientemente de las vestiduras que se le pusieran: tenía que ser una redefinición política que trascendiera tales distorsiones. Esto empezó a ser visible cuando la bipolaridad mundial entró en fase de desmontaje, en la segunda mitad de 1989. Entonces, el conflicto

salvadoreño dejó de ser un pie de página en la agenda de las dos grandes potencias —Estados Unidos y la Unión Soviética— y pudo autorreconocerse como una realidad capaz de construir sus propias soluciones.

En aquel momento, el reflector internacional comenzó a girar y los apoyos que durante el desarrollo del conflicto habían estado referidos a cada una de las partes empezaron a enfocarse hacia la solución política. De esta manera, internamente, fue posible emprender la tarea de sentarse —un bando y otro— a construir los entendimientos básicos de la solución definitiva. Como en un escenario teatral, en el centro aparecía una mesa iluminada y en los extremos, en una oscuridad progresiva, quedaban, en penumbras, las trincheras. Ahí volvió a surgir la presencia de México, en la primera línea de la acción. ¿Qué país, que no fuera México, podía crear las condiciones ideales para acoger esa mesa de manera permanente? Hubo, desde luego, otros países hermanos que pusieron lo suyo, pero México fue siempre la sede principal y natural.

El aporte de México en la etapa puramente negociadora no se limitó, desde luego, a la hospitalidad física y al apoyo logístico permanente para que el proceso pudiera desenvolverse de manera espontánea y fluida, conforme a los distintos estadios de su propia evolución; hubo un acompañamiento político y diplomático comprometido con la dinámica del avance que fue desde el vínculo que se desarrolló entre los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Alfredo Cristiani hasta las diversas expresiones de colaboración diplomática y técnica que requirió la dinámica del esfuerzo integral hacia la paz. Las Naciones Unidas, por la vía de su secretario general, conformaron un grupo de cuatro países amigos, entre los cuales destacó el papel de México, encarnado en su representante permanente ante el organismo mundial, el embajador Jorge Montaña.

La extraordinaria y fraternal hospitalidad mexicana durante todo el proceso negociador tuvo su broche de diamante en la ceremonia de la firma del Acuerdo de Paz, en el Castillo de Chapultepec. Aquella mañana del 16 de enero de 1992, todos los ánimos positivos convergieron en una atmósfera iluminada por los destellos del futuro. Vendría la primera gran prueba: el cumplimiento de lo acordado, tarea en la que México volvió a poner su inspiración acompañadora. Después se abriría la fase de la construcción de la paz, en la que los salvadoreños aún estamos comprometidos, porque se trató y se trata de redefinir El Salvador como una nación moderna, humanizada, progresista y de raigambre pacífica. El trabajo nunca concluye y cada etapa determina las posteriores.

Las tareas del presente y del futuro

La paz salvadoreña se firmó a comienzos de 1992 y, como era natural y previsible, con ello se abrió una etapa nueva del proceso que los salvadoreños vivíamos desde al menos sesenta años antes, desde aquel levantamiento campesino que el poder establecido etiquetó como un movimiento comunista y trató con criterio estrictamente militar, dejando de lado el tratamiento político acorde con la realidad que entonces debió dársele. Lo que en 1992 se hizo, en buena medida, fue practicar la lección aprendida y ubicar lo político en la primera línea del tinglado nacional, dentro de una opción inequívocamente democrática y conforme a las exigencias, a las posibilidades y a las aspiraciones puestas en juego luego de todos los traumas vividos.

A partir de 1992, la construcción evolutiva del proceso democrático de El Salvador ha pasado por distintas etapas, todas ellas concatenadas por la misma dinámica histórica. Desde hace poco más de veinte años lo más relevante puede resumirse

en una frase: aprendizaje de convivencia pacífica y democrática. Éste no es, desde luego, un ejercicio exclusivo de la sociedad salvadoreña: prácticamente todas las sociedades nacionales de nuestra América —unas más, otras menos— edifican su propia modernización. En nuestro caso, sin embargo, el tránsito está entre los más difíciles, porque en ningún momento del pasado hubo un intento serio y sostenido de emprender la vivencia democratizadora como un esfuerzo verdaderamente nacional. La solución política de la guerra ha sido la plataforma posibilitadora de dicha tarea insoslayable.

El presente nos mantiene ocupados en esta tarea de cara al futuro. El desafío es básicamente estructural, con una primera labor en la agenda, que consiste en limpiar la casa de todos los resabios y residuos de la larga época autoritaria, para seguir acomodando las piezas correspondientes a esta nueva realidad, ahora en un escenario diferente: el que provee la actual expansión global, sin precedentes.

Como nunca antes, hoy todos somos visibles en el mapamundi, no sólo como diseños geográficos, sino como presencias nacionales. Esto cambia todas las perspectivas y es sin duda el augurio de una humanización de proyecciones aún indefinibles. Los viejos paradigmas son cuestionados y la construcción de los que vendrán a sustituirlos es una misión compartida sin fronteras. El tiempo está haciendo su obra.